

CEOE advierte de un frenazo en los convenios por el recorte de jornada

ASAMBLEA GENERAL 2025/ Garamendi afirma que los acuerdos firmados caen un 7% en lo que va de año y que los trabajadores protegidos son un 9,5% menos, ante la incertidumbre por la posible reforma.

Gonzalo D. Velarde. Madrid

Los empresarios no comparan el triunfalismo del Gobierno en materia económica y advierten de los perversos efectos que tienen las medidas que pretende aprobar el Ejecutivo. Nada más lejos de la realidad, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que no se arroge los buenos datos económicos que se dan, en buena medida, gracias a la labor de las empresas. Así lo expresó el máximo líder de la patronal española en la Asamblea General celebrada ayer, donde repasó las principales preocupaciones que tienen los empleadores en estos momentos.

Y una sobresale por encima de todas: la posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Aseguró Garamendi durante su discurso de clausura del acto que la medida estrella de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es en realidad una fuente de "inseguridad jurídica" que genera incertidumbre entre las empresas. Y prueba de ello es el frenazo que asegura se está produciendo en la firma de convenios colectivos: un 7% menos que hace un año, lo que ha provocado que haya un 9,5% menos de trabajadores protegidos por estos acuerdos laborales. La posi-

bilidad de tener que renegociar los marcos pactados entre empresas y sindicatos si se reduce la jornada máxima de trabajo está detrás de ello.

Este foco de inseguridad jurídica y de inestabilidad que constituye la reducción de jornada tiene otro efecto colateral: ahuyenta a los inversores extranjeros. "Están en el punto de mira", avisa el líder de CEOE asegurando que se trata de una medida "partidista". Además, recordó que este año vence el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y avisa de que será difícil pactar con los sindicatos un nuevo marco de recomendaciones, entre las principales en materia salarial, con la incertidumbre sobre la posible reducción de la jornada laboral. Una medida, que reitera Garamendi será un golpe especialmente severo para las pequeñas y medianas empresas y autónomos con empleados a cargo, que cargarán en su mayoría con los 23.000 millones de euros.

A este caldo de inestabilidad también agrega el presidente de la patronal el efecto que están teniendo en la imagen internacional de España los casos de corrupción que afectan a la cúpula del PSOE y acechan al Gobierno. En lo que, además, volvió a salir en defensa de las empresas: "Los



El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, durante la Asamblea General celebrada ayer.

corruptores son quienes tienen el poder", volvió a señalar en contra de las voces que apuntan a la responsabilidad de los empresarios en la presunta trama de mordidas.

También hizo especial hincapié el líder de CEOE en la cuestión del absentismo, que supone ya uno de los principales obstáculos para la ganancia de productividad de la economía española. Recordó que, según las estadísticas, ca-

da día se ausentan de su puesto de trabajo cerca de 1,5 millones de trabajadores y avisó de que el coste previsto para este año supera los 32.000 millones de euros, un 12,5% más que el año pasado, de los que 16.000 correrán a cargo de las empresas. También criticó que el Ministerio prefiera tratar con mayor urgencia la reducción de jornada y no el absentismo, pese a que no solo afecta a las em-

presas, sino a la propia salud de los trabajadores. Para resolver el aumento del absentismo, apuntó propuestas como aumentar el número de médicos y reforzar el papel de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Y sentenció sobre esta materia que alertó de que una parte del absentismo es "fraude", lo que pidió que se diga con "claridad". "Hay que sentarse y hablar. No se puede

La patronal pide que el nuevo modelo de financiación se negocie entre todas las comunidades

ocultar esa realidad", apuntó Garamendi.

Volviendo a poner sobre la mesa la reducción de la jornada laboral, señaló el líder de CEOE la contradicción que supone, a su criterio, que se ponga sobre la mesa la reducción de jornada cuando ni se han presentado unos Presupuestos Generales del Estado. Y exige al Gobierno que apruebe unas nuevas Cuentas ya que es "inaudito" que se aún estén en vigor las de 2022.

El modelo de financiación

Por último, Garamendi también quiso referirse al acuerdo de financiación singular para Cataluña. Aquí, reclamó al Gobierno que aborde el nuevo modelo con todas las comunidades autónomas, de forma "multilateral" y "no solo bilateral con Cataluña". "Hay que ir por el camino adecuado, lo demás será rupturista, un modelo de enfrentamiento, que no es lo que nos conviene en España", señala puntualizando que la financiación autonómica es una "asignatura pendiente hace años" en España y que afecta a más regiones, que piden cambio en el sistema actual, como la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, entre otras. A su juicio, lo que no sirve es "cerrarlo [el nuevo modelo] y decir que todos os venís aquí", en tanto que es un asunto de debate nacional. Finalmente, concluyó que "no se puede confundir pluralidad con singularidad".

Las hipotecas que nos dejará Pedro Sánchez



RADAR MÓVIL

Ricardo T. Lucas

Como haría un insolvente que trata de pagar sus deudas con otros préstamos, el presidente del Gobierno firma más hipotecas que no pretende pagar y a las que deberemos hacer frente todos los españoles. Es lo que ha venido haciendo desde que llegó al poder en 2018, disparando el gasto público y el endeudamiento hasta máximos históricos como forma de ganar apoyos, doblegar voluntades y conseguir el crédito político que no le daban las urnas. Es decir, cargando a los contribuyentes presentes y futuros las facturas de su gestión manirrota. El culmen de esta forma de proceder es la financiación

singular para la Generalitat catalana. Sánchez ha comprometido la entrega de un mayor porcentaje de los recursos aportados por todos los españoles a los dirigentes políticos de una de las regiones más prósperas del país, en un acuerdo negociado a espaldas de los ciudadanos y de sus legítimos representantes que condicionará la capacidad futura del Estado para mantener unos servicios públicos de calidad en todo el territorio nacional. Se trata de una hipoteca firmada con condiciones muy desfavorables para el conjunto de los españoles (incluidos los catalanes, por supuesto), ya que si un próximo gobierno decidiera no asumir lo prometido por el líder socialista para conservar el poder durante unos meses más, los partidos separatistas tendrían la base argumental para denunciar otro agravio histórico y volver al unilateralis-

mo. Una carga más difícil de cuantificar, pero desde luego onerosa, es el desprestigio de las instituciones públicas a causa de su instrumentalización por el sanchismo, que sumado a la inseguridad jurídica derivada de los interminables cambios regulatorios y la voracidad recaudatoria de Hacienda está frenando las inversiones hacia nuestro país, según denuncia Antonio Garamendi, el presidente de la patronal CEOE. Recobrar la confianza de inversores y empresas, erosionada por los abusos del Ejecutivo actual y los casos de presunta corrupción que implican al círculo político y personal de Sánchez, costará

El presidente se maneja como un insolvente que trata de pagar sus deudas con otros préstamos

muchos esfuerzos. Pero, sin duda, la mayor por volumen de las hipotecas que dejará Sánchez a las próximas generaciones es la deuda de las pensiones. Desde que accedió a La Moncloa, el dirigente socialista ha llevado a gala haber recuperado el poder adquisitivo de las prestaciones de jubilación, sobre todo de las no contributivas, estableciendo por ley que aumenten cada año lo mismo que la inflación. Pero como casi todo lo que anuncia el sanchismo tiene trampa, pues lo ha hecho a base de disparar la deuda de la Seguridad Social por encima de los 100.000 millones de euros mediante préstamos extraordinarios de Hacienda. Un burdo truco contable, ya que a la postre quien deberá responder de esos pasivos es el Estado, que arrastra una deuda total de 1,67 billones de euros tras haberla incrementado un 40% el actual

Gobierno. En este punto, resulta inevitable comparar el despilfarro con que se maneja Sánchez y el proceder del primer ministro francés, el centrista François Bayrou, quien acaba de anunciar un severo ajuste presupuestario de 43.800 millones de euros para el próximo ejercicio a fin de evitar que Francia sufra una crisis de deuda como la que asoló Grecia en el año 2008, aún asumiendo que puede costarle su cargo si los grupos parlamentarios que sostienen al ejecutivo que lidera votan en contra de un plan presupuestario que implica congelar las pensiones y los salarios públicos en el país vecino. Bayrou justificó la urgencia de que el Estado francés se apriete el cinturón porque "nos hemos vuelto adictos al gasto público". ¿Y no es éste el mejor resumen de los siete años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España?